

FAIA. VOL 5. N°25. 2016

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 A LA REAPERTURA DE UN PROCESO HACIA LA PAZ EN COLOMBIA

APROXIMACIÓN A UNA POSIBLE REPETICIÓN COMO COMEDIA DE LA HISTORIA DE
HACE 25 AÑOS.

CARLOS MANUEL ZAPATA CARRASCAL

RESUMEN

A 25 años de haberse promulgado en Colombia la CARTA MAGNA de 1991 (CPC desde aquí), si se aplica el considerando teórico según el cual toda constitución política al reflejar los intereses de la élite dominante se convierte en el soporte jurídico-legal de la clase social hegemónica, es posible afirmar que aquella amparó la primera gran Ola neoliberal aperturada desde el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo (Bienvenidos al futuro).

NEOLIBERALISMO Y CPC

Esa bienvenida oficial al neoliberalismo, lo mismo que su ingreso por la puerta grande de la internacionalización económica, fue suficiente para que Gaviria saliera del solio presidencial a ocupar la Presidencia de la OEA.

Ahora bien, por otra parte, si se analiza la promulgación de la CPC en el marco de las ideas del liberalismo y de la Social democracia, se dirá que fue un pacto a tres manos para viabilizar la pacificación y las posibilidades de pluralismo y convivencia en medio de las diferencias ideológicas y con el fin de neutralizar el terrorismo de las mafias del narcotráfico.

La aprobación de la no extradición, desde aquel momento, se argumenta en contra de las defensas liberales y social demócratas a la CPC, porque en la foto histórica de la firma por parte de los representantes de los liberales, conservadores y la izquierda desmovilizada, a lo lejos parece notarse la cuarta rubrica hecha por Pablo Escobar Gaviria.

La pacificación y aseguramiento de garantías al nuevo orden neoliberal que se le asignó a Gaviria Trujillo, también entró a cuestionarse desde antes de la firma de la CPC, porque justo el mismo día en que se posesionaron los constituyentes provenientes de diversidad de sectores sociales, étnicos, políticos e ideológicos, el flamante Presidente de República

ungido por la familia del inmolado contradictor de las mafias al interior de su propio partido liberal, Luis Carlos Galán Restrepo, ascendió al poder ordenando la aniquilación militar del secretariado de las FARC en La Uribe.

Se dice que la CPC del 91 fue un gran acuerdo de paz, pluralista, garantista y participativa, pero por lo dicho, surgen preguntas que pueden horrorizar: entre quiénes, para qué y por qué. Lo cierto es que para responder no se puede olvidar que un año antes de la expedición de esta nueva Constitución, el país había sido tan arrinconado por los terrores de las mafias, que tres candidatos presidenciales, por fuera de la gran cantidad de defensores de derecho humanos, fueron objetos de magnicidios.

En términos generales, por fuera de la tutela y los reconocimientos, aunque de manera ambigua y general, de los derechos para las etnias, la CPC de 1991, ha sido una constitución para soportar la concreción del modelo neoliberal, por lo que es explicable la lucha desatada contra la insurgencia que no endosó el cheque en blanco de la internacionalización económica.

La otra verdad, como lo reconoció el ex presidente Andrés Pastrana Arango, es que él, al igual que Gaviria, también quería la derrota militar de las guerrillas, línea de tierra arrasada continuada por Álvaro Uribe Vélez con las Convivir transmutada en paramilitares. Esto, como se sabe, se hizo en el marco de la seguridad para el capital extranjero a cualquier costa, función que cumplió cabalmente el Plan Colombia ideado por el PENTAGONO para que la oligarquía colombiana pudiera doblegar, como en efecto lo hizo, a una subversión que en un momento del conflicto armado superó al ejército colombiano.

A lo largo de esa misión guerrerista para conceder mejores condiciones al capital extranjero y a las privatizaciones que terminaron por enterrar lo público, incluso, en los momentos en que se recurrió al paramilitarismo por parte de las élites y sus gremios para reforzar y complementar el accionar de las Fuerzas Armadas, estuvo Santos tras bambalinas, ocupando los más altos cargos públicos en donde se cocinaron multiplicidad de reformas y tomas de decisiones a favor de la consolidación neoliberal y escalamiento de la guerra.

La continuidad de ese proceso, ahora teniéndolo como Presidente reelegido incluso por una parte de la Izquierda como el mandatario de la paz, también implica la sucesión de favorabilidades para el neocapitalismo en detrimento creciente de las condiciones de vida digna para las mayorías.

En ese sentido, hablar de una segunda gran ola neoliberal que aumentará de magnitud tras la refrendación o la formalización de la constitucionalidad de los acuerdos de La Habana, no es una idea traída de los cabellos, considerando la crisis global del capitalismo y la urgencia que tiene desde uno de su más eficiente Estado gendarme para acabar con el cuarto de hora concedido a la izquierda latinoamericana después de los colosales niveles de

pobreza dejados por el Consenso de Washington y la versión salvaje de aquel sistema económico.

El momento histórico por el que pasamos los colombianos, no solo se parece al de 1991 por la redición de la voracidad de la acumulación capitalista la cual emplea un nuevo acuerdo interclasista como intersticio para emerger y catapultarse para resolver una problemática nacional en gran parte incubada por factores en donde los actores principales fueron de una u otra forma determinadores, sino también por los mecanismos y fuerzas que volverán a dinamizar procesos en función de los intereses en juego.

En ese sentido, vale recordar que las élites colombianas a lo largo de la dependencia capitalista hacia los amos gringos, en todo el contexto latinoamericano, han sido las más disciplinadas, siendo modelo de singulares procedimientos para utilizar y eliminar a los oponentes en los momentos en que las condiciones lo permitan.

No sin evidencias empíricas representadas en víctimas, exclusiones, desigualdades y violencias soterradas, los sectores que han dominado al país se ufanan en ser “la democracia más antigua del continente”, pseudo característica que se afina en la sostenibilidad de una condición muy particular, cual es ser uno de los países más violentos y corruptos del mundo, pero al mismo tiempo en donde menos la clase social dominante (al menos en el siglo XX y lo que va corrido del XXI), ha tenido que recurrir a golpes de Estado abiertos o dictaduras militares y civiles.

El uso del paramilitarismo como estrategia contrainsurgente Made in USA para asegurar la penetración del Capital transnacional y enfrentar levantamientos y gobiernos populares en el patio trasero, es lo más reciente al lado de una serie de acciones en donde las eliminaciones por cualquier medio del oponente aún tienen vigencia en Colombia y otras partes, en donde se emplearon en contra por ejemplo de Jorge Eliécer Gaitán e innumerables dirigentes mediante magnicidios y asesinatos selectivos.

Habiendo empleado y dado a los Paramilitares el trato acostumbrado del USAlo y acábelo, lo más predecible ante la existencia de actores armados que heredaron los espacios y poderes regionales de los grandes capos de las AUC puesto a buen recaudo del gobierno gringo, es que a estos se les reasignen las tradicionales funciones de la guerra sucia que a lo largo de la historia republicana de Colombia la élite hegemónica ha usado para liquidar al contrario.

El hecho que las llamadas BACRIM hayan paralizado regiones cuando lo han querido, conservando un poder permanente a nivel local rural y urbano en remplazo e incidiendo en entes territoriales, evidencia que uno de los principales conflictos de los post acuerdos girará alrededor de estos grupos. Como también podría suponerse, que ante el protagonismo de sectores y dirigentes que no traguen entero el cuento de la paz automática, la gran burguesía no se ruborizará para volver a requerir trabajo sucio en la perspectiva de

preservar hegemonía a cambio de negociar mejores tratos para los que en teoría, a la luz de los acuerdos de La Habana, serán perseguidos.

La existencia de sectores contrarios al plan santista de la paz, en donde todos giran alrededor del ex presidente Uribe, es otra razón para darle fuerza a la hipótesis antes esbozada, por cuanto tales sectores que detentan poder estructural y funcional en algunas regiones colombianas, la última vez que en 2016 paralizaron gran parte del Caribe, acudiendo al terrorismo por celular y a la sospechosa parálisis de las fuerzas del orden, exigieron participación en los diálogos de paz.

Otra gran razón que no descarta la posibilidad para que las circunstancias que rodearon el antes y después de la CPC de 1991 se reediten con nuevo ropaje y actores, está representada porque la segunda ola neoliberal que pocos vemos venir, tendrá asegurado el piso estructural jurídico-administrativo para volcarse sobre los colombianos, como quiera que en estos 25 años o un poco más, los gobiernos liberales según la tradición, pero conservadores a la usanza de los orientadores gringos, cumplieron gradualmente y de la mejor manera posible la colocación de las fichas reformistas en todos los niveles de la estructura estatal requeridos por aquellos halcones militares y corporativistas extranjeros.

Si en los años que siguieron al de 1991 la elite hegemónica, impuso Leyes a favor de los propósitos neoliberales, entre otras la 142 sobre los mal llamados servicios públicos y 100 en relación con las EPS, para lo cual se utilizó la violencia y guerra sucia en contra de la integridad de los opositores a las mismas y otros engendros similares, para la segunda ola que se avecina, ese mismo sector dominante ya está preparado tanto para hacer elegir al continuador de Santos, Germán Vargas Lleras, como para neutralizar la protesta popular mediante el empleo del nuevo Código de Policía.

De tal manera que como quiera que en La Habana no estuvo en juego el modelo económico mismo, mucho menos después de tan eficiente trabajo de reestructuración estatal en función de los intereses del gran Capital, lo que se continuará de construir por parte de los sectores dominantes, se hará sobre seguro, con garantías y sin someterse a ninguna condición de replanteamiento o revisión, por lo que la política de civil que debe realizar las FARC y los sectores que aún no han despegado para trascender la oferta restringida de la paz santista, se enfrentará al enorme reto de desmontar una de las mejores piezas de reformas legales, constitucionales, laborales, políticas, sociales y económicas que burguesía genuflexa haya edificado en Latinoamérica.

Es más, considerando las paulatinas restricciones a una de las máximas defensas demoliberales y social demócratas de la CPC-91, como lo es la Tutela, limitada por la ley fiscal. Así como por los altos deterioros en los órganos de control y mecanismos de participación ciudadana, el relanzamiento de la lucha por la defensa de la recuperación del espíritu de la Carta Magna a lo cual aún aspiran algunos o la proyección de un nuevo movimiento

constituyente, quedan sin pocas posibilidades de hacerse realidad ante las contrarreformas y planes de la burguesía para reciclar mecanismos de sostenibilidad en el poder.

Cabe apuntar que las buenas voluntades y entusiastas apoyos demo-liberales y social demócratas a procesos como el de la séptima papeleta, constituyente y post desarrollo de la CPC de 1991, también tuvieron en estas colectividades políticas altas contraprestaciones y abundantes burocracias fuera y dentro del país, siendo uno de los casos más representativos el Ministerio de Salud concedido a quien firmara la constitución por los sectores de “izquierda”, el ex desmovilizado del M-19 Antonio Navarro Wolff.

No obstante lo reciente de esa situación, muchos han olvidado que la funesta Ley 100 que tantos males casi incurables ha causado a los colombianos, entre otros el exponencial aumento de la corrupción y los enriquecimientos de unos pocos a costa de los deterioros en la Salud de muchos, fue establecida en 1993.

Al lado de lo que para aquel tiempo aún no se llamaba “mermelada”, pero que al igual que hoy empalagaba con poder, cooptación y cambios en las ideas, entre quienes se dejaron desestabilizar por los cantos de las sirenas neoliberales, también se encontraban otros que pagaron con sus vidas el sostenimiento de algún resquicio moral frente al avasallamiento del querer por parte de las mafias

En este empeño de la gran oligarquía para aumentar la concentración de riquezas cada vez en menos manos, incluso, desde el gobierno de Virgilio Barco Vargas hasta la presente, el liberalismo y la social democracia han puesto la mayor cuota de aportes en condición de portaestandartes de primera línea de los propósitos hegemónicos invisibles para las mayorías que en las urnas de la refrendación u otros mecanismos colectivos respaldarán indirectamente la nueva forma de dominación.

Los primeros, por haber asumido sin rubores el liderazgo neoliberal, y los segundos, por neutralizar la protesta social complementado los propósitos de acumulación de capital, haciendo ver las propuestas de maquillaje al monstruo voraz del capitalismo como reformas imprescindibles para transitar hacia sociedades menos desiguales o más equitativas.

En medio de esos dos sectores, la ciudadanía, sociedad civil, pueblo, masas o multitud, como últimamente se llama a la masa heterogénea de personas en gran parte encargada de sostener al régimen, y las dirigencias opositoras, atomizadas entre otras causas por la labor soterrada del Gran Capital cooptador de dirigentes para sus propósitos neutralizadores de la protesta social, los sectarismos e individualismos agenciados por la filosofía capitalista para pseudo pintarse de libertad y respeto de las diferencias, se encuentran atrapadas respectivamente por el traspaso al sector hegemónico de sus poderes decisorios y de participación ciudadana, así como por la enorme dificultad que hay para converger en la diferencia y en contra de un oponente que a diferencia de sus contradictores planea estratégicamente la dominación y tácticas para mantenerse.

Que estas fuerzas espontaneas u organizadas capitalicen el momento en que se encuentra Colombia, a favor de la escritura colectiva de un nuevo capítulo de la historia de este país, dependerá por primera vez de la creatividad con la cual se asuma el hecho de que en esta parte del mundo se está definiendo la posibilidad para dejar a las nuevas generaciones la administración de circunstancias difíciles y complejas que en caso de erradicarse, estarán contribuyendo a detener los riegos que asedian el mantenimiento de la especie humana sobre el Planeta.

Se hace referencia a la emersión de una gran transformación ética-colectiva para enfrentar de salida los enraizados y complejos factores que sostienen a las corrupciones, clientelismos electorales, insolidaridades, injusticias y privatizaciones. Democratizar plenamente al país, pasa no tanto por la concesión de curules en el Congreso a la dirigencia desmovilizada de las guerrillas, sino por la depuración de las redes clientelares y de corrupciones que medían a favor de la sostenibilidad del régimen, situación que en gran parte involucra a la población de a pie que hasta propone y continua la tradición de la manipulación de conciencias y empleo del voto que mantiene a los propios verdugos de las mayorías en los poderes permeados por los intereses del sistema económico dominante.

Desde las localidades y en los espacios en donde el neoliberalismo hace su agosto empleando los circuitos estatales y privados para sostenerse vivo, es que hay que jalonar procesos de socavamiento material, pero sobre todo, ejemplarizantes en comportamientos contrarios a la multiplicidad de anti valores que el sistema difunde para aislar a las personas, grupos y etnias de las posibilidades para converger en luchas ambientales, sociales, económicas y políticas.

Recordemos que haciendo acciones de minado, mediante el empleo de operaciones avispas, tal vez aprendiendo de la propia insurgencia y la guerra de guerrillas, el neoliberalismo se hizo al dominio de los comercios controlados por grandes corporaciones multilaterales, multiniveles y multipropósitos. Tras el derrumbe del Muro de Berlín y el advenimiento de la democracia liberal perpetua que las sirenas neocapitalistas hicieron sonar conduciendo a la genuflexión y aceptación, no solo están las gestas de Mijail Gorbachov, Lev Walesa, entre otros, sino también estrategias políticas, económicas, sociales e ideológicas que durante algún tiempo se fueron armando como piezas de rompecabezas hasta irrumpir con acciones definitivas para imponer lo que hoy no es tan fácil derrumbar con contestarismos, sino con integraciones por la base y hacia la izquierda.

La educación, por supuesto, tiene mucho por hacer en ese proceso, pero es un tema para otro escrito.